



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FERREYRA, HECTOR DANIEL
s/APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS y APROPIACION INDEBIDA DE
RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL VICTIMA: ADMNISTARCIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS 87818/2018

Córdoba, 13 de febrero de 2023.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO:
FERREYRA, HECTOR DANIEL s/APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS y
APROPIACION INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL VICTIMA:
ADMNISTARCIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 87818/2018, venidos a
despacho a los fines de resolver la solicitud de extinción de la acción por vía del
mecanismo de reparación integral, previsto por el art. 59 inc. 6 del C.P., que formula la
defensa técnica del acusado Héctor Daniel Ferreyra;

Y CONSIDERANDO:

I.- Planteo de la defensa

Con fecha 24 de noviembre de 2022 los Dres. Jorge B. Aguirre Mosquera y
German Gianotti, se presentan y solicitan al Tribunal en nombre y representación de su
defendido, Héctor Daniel Ferreyra, que se aplique a la presente causa el mecanismo de
reparación integral normado por el art. 59 inc. 6 del Código Penal y –en consecuencia- se
declare extinta la acción penal ejercitada en su contra. Ofrecen en carácter de reparación
abonar la suma de doce millones setenta y seis mil ciento veintidós pesos con setenta y
nueve ctvos. (\$12.076.121,79).

El Tribunal con fecha 24 de noviembre hizo conocer a las partes y en su
carácter de víctima a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la
propuesta que formula la defensa técnica del acusado y los convoca a audiencia para el día
15 de diciembre del cte. año a 12:00 hs.

II. La audiencia

En la fecha señalada se celebró audiencia a fin de que las partes expusieran
sus posturas y se tomara conocimiento de *visu* del acusado. Durante la misma, los Dres.
Jorge B. Mosquera y Germán Gianotti en representación del acusado, manifestaron que a
Ferreyra se lo acusa de 9 nueve hechos de apropiación indebida de tributos por un capital
que asciende a la suma de tres millones ochocientos noventa y un mil novecientos ochenta
y cinco pesos y veintidós ctvos. (\$3.891.985,22) Refiere que la propuesta de reparación

formulada consiste en abonar la suma de doce millones setenta y seis mil ciento veintidós





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

pesos con setenta y nueve ctvs. (\$12.076.121,79), suma que sería el resultante de aplicar la tasa pasiva del Banco Nación al capital histórico. Asimismo, manifiestan que quieren remarcar ciertos aspectos fácticos de Ferreyra que deben tenerse en cuenta cuando se hablan de supuestas retenciones de los años 2012 y 2013. En este contexto, describen que la empresa *Matrickeria Austral* se encuentra en una delicada situación económica, pero se debe tener en cuenta que la empresa autodeclaró todas las obligaciones y esta es la razón por la cual la acción no se encuentra prescripta. La empresa ingresó a la moratoria, que después, no cumplió el plan a causa de la delicada situación económica. En relación al acusado, manifiestan que se trata de un empleado, siempre lo fue, la asamblea lo designa como Presidente en un período que concluyó en el año 2018. Por lo cual solicitan que se tengan en cuenta éstas circunstancias al momento de adoptar la decisión ya que pone en contexto la decisión adoptada por la empresa.

Por su parte, la Dra. Cecilia Minaverri, que en su carácter de denunciante y en representación de víctima (AFIP) manifiesta que se opone a la propuesta que formula la defensa del acusado porque considera que el contenido de la misma debe retrotraerse al momento en tuvieron lugar los hechos, lo cual hoy representaría la suma de casi veinte millones de pesos (\$20.000.000) si se aplican los intereses. Señala que la AFIP aplica una tasa diferente a la que utiliza la defensa en sus argumentos y allí radica la diferencia en los montos señalados. Refiere que se trata de aportes retenidos a 300 trabajadores, que fueron las víctimas y aún sufren las consecuencias ya todavía no se pagaron los aportes y de forma indirecta también resulta lesionado el sistema de previsión social. De forma tal que el paso del tiempo, que la defensa argumenta como atenuante en este contexto se valora como agravante por la parte que representa. Por todo lo cual, solicitan se rechace la petición que formula la defensa de aplicar al presente caso el mecanismo de reparación integral y concluye haciendo reserva del caso federal.

Finalmente, el Sr. Fiscal General, Dr. Carlos Gonella, dictamina que por mandato del art. 22 del CPPF. las partes se encuentran obligadas de buscar la solución más justa. Refiere que reparación integral es algo que excede lo económico. Sentado ello, señala que habiendo escuchado a la parte que representa AFIP refiere que el verdadero perjuicio económico lo sufren los trabajadores que pretenden percibir una jubilación. Con lo cual, refiere que con carácter previo a dictaminar le gustaría conocer cuánto representa el daño en cada uno de los trabajadores, adelantando que el Ministerio Público, de acuerdo a la ley, se encuentra de acuerdo a la resolución de estos casos bajo ese tipo de mecanismo.

Así las cosas, con fecha 16 de diciembre de 2022 se requiere que AFIP informe con carácter urgente si se encuentra en condiciones de determinar el daño que se habría ocasionado a cada trabajador. Dicha información fue incorporada con fecha 1 de febrero de 2022, de la misma se corre vista al titular de la acusación a fin de que dictamine respecto de la cuestión planteada.

Fecha de firma: 13/02/2023

Firmado por: TRISTAN LOPEZ VILLAGRA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA



#37050776#352879722#20230213075747592



Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

Con fecha 7 de febrero de 2022 el Sr. Fiscal General, Dr. Carlos Gonella, dictamina que conforme las consideraciones vertidas en la audiencia de visu y el detalle del perjuicio ocasionado a cada trabajador informado por AFIP considera que la propuesta de reparación integral que formula la defensa técnica del acusado resulta adecuada, por lo cual considera que se debe aplicar al presente caso el mecanismo de reparación integral como lo peticionan.

III. La acusación

El requerimiento fiscal de elevación a juicio, fs. 114/117, atribuye a Héctor Daniel Ferreyra la comisión del hecho que a continuación se transcribe: *“Primero: Durante el mes de octubre de 2012, el Sr. Héctor Daniel Ferreyra DNI N° 14.298.823, retuvo a sus empleados la suma de \$433.589,68 en concepto de aportes a la seguridad social, siendo la fecha de vencimiento para el ingreso al fisco de dichas retenciones mensuales el día 7 de noviembre de 2012. Así las cosas, el día 7 de diciembre de 2012, pasados los 30 días corridos de producirse aquel vencimiento, se abstuvo de depositar el total de la suma mencionada. Segundo: Durante el mes de noviembre de 2012, el Sr. Héctor Daniel Ferreyra DNI N° 14.298.823, retuvo a sus empleados la suma de \$452.442,98 en concepto de aportes a la seguridad social, siendo la fecha de vencimiento para el ingreso al fisco de dichas retenciones mensuales el día 07 de diciembre de 2012. Así las cosas, el día 7 de enero de 2013, pasados los 30 días corridos de producirse aquel vencimiento, se abstuvo de depositar el total de la suma mencionada. Tercero: Durante el mes de febrero de 2013, el Sr. Héctor Daniel Ferreyra DNI N° 14.298.823, retuvo a sus empleados la suma de \$557.876,76 en concepto de aportes a la seguridad social, siendo la fecha de vencimiento para el ingreso al fisco de dichas retenciones mensuales el día 07 de marzo de 2013. Así las cosas, el día 7 de abril de 2013, pasados los 30 días corridos de producirse aquel vencimiento, se abstuvo de depositar el total de la suma mencionada. Cuarto: Durante el mes de abril de 2013, el Sr. Héctor Daniel Ferreyra DNI N° 14.298.823, retuvo a sus empleados la suma de \$498.876,76,76 en concepto de aportes a la seguridad social, siendo la fecha de vencimiento para el ingreso al fisco de dichas retenciones mensuales el día 07 de mayo de 2013. Así las cosas, el día 7 de junio de 2013, pasados los 30 días corridos de producirse aquel vencimiento, se abstuvo de depositar el total de la suma mencionada. Quinto: Durante el mes de mayo de 2013, el Sr. Héctor Daniel Ferreyra DNI N° 14.298.823, retuvo a sus empleados la suma de \$517.185,35 en concepto de aportes a la seguridad social, siendo la fecha de vencimiento para el ingreso al fisco de dichas retenciones mensuales el día 07 de junio de 2013. Así las cosas, el día 7 de julio de 2013, pasados los 30 días corridos de producirse aquel vencimiento, se abstuvo de depositar el total de la suma mencionada. Sexto: Durante el mes de junio de 2013, el Sr. Héctor Daniel*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

de aportes a la seguridad social, siendo la fecha de vencimiento para el ingreso al fisco de dichas retenciones mensuales el día 08 de julio de 2013. Así las cosas, el día 8 de agosto de 2013, pasados los 30 días corridos de producirse aquel vencimiento, se abstuvo de depositar el total de la suma mencionada. Séptimo: Durante el mes de julio de 2013, el Sr. Héctor Daniel Ferreyra DNI N° 14.298.823, retuvo a sus empleados la suma de \$414.599,22 en concepto de aportes a la seguridad social, siendo la fecha de vencimiento para el ingreso al fisco de dichas retenciones mensuales el día 07 de agosto de 2013. Así las cosas, el día 7 de septiembre de 2013, pasados los 30 días corridos de producirse aquel vencimiento, se abstuvo de depositar el total de la suma mencionada. Octavo: Durante el mes de agosto de 2013, el Sr. Héctor Daniel Ferreyra DNI N° 14.298.823, retuvo a sus empleados la suma de \$349.687,49 en concepto de aportes a la seguridad social, siendo la fecha de vencimiento para el ingreso al fisco de dichas retenciones mensuales el día 09 de septiembre de 2013. Así las cosas, el día 9 de octubre de 2013, pasados los 30 días corridos de producirse aquel vencimiento, se abstuvo de depositar el total de la suma mencionada. Noveno: Durante el mes de septiembre de 2013, el Sr. Héctor Daniel Ferreyra DNI N° 14.298.823, retuvo a sus empleados la suma de \$223.972,82 en concepto de aportes a la seguridad social, siendo la fecha de vencimiento para el ingreso al fisco de dichas retenciones mensuales el día 07 de octubre de 2013. Así las cosas, el día 7 de noviembre de 2013, pasados los 30 días corridos de producirse aquel vencimiento, se abstuvo de depositar el total de la suma mencionada”.

En virtud del hecho descripto a Héctor Daniel Ferreyra se lo acusa de ser autor del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social (art. 7 del Régimen Penal Tributario, en concurso real y en calidad de autor (art. 13 de la Ley 27.430 y 45 del C.P.).

IV.- Análisis del planteo formulado por las partes

La reforma introducida al Código Penal por la Ley n° 27.147, publicada en el Boletín Oficial el 18 de Junio de 2015, introduce mecanismos alternativos que receptan los lineamientos del sistema procesal acusatorio, en línea con el diseño instaurado por el Código Procesal Penal Federal que aún no se encuentra plenamente vigente en toda la jurisdicción penal. En lo que aquí interesa, la modificación del art. 59 del Código Penal, incorpora en el inciso 6° como nuevas causales de la acción penal los institutos de la reparación integral y conciliación, de conformidad con el procedimiento que se establezcan en las leyes adjetivas. Posteriormente, con fecha 24 de diciembre de 2015 mediante D.N.U. N° 257/2015 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, se suspende la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, aduciendo –entre otras razones- “que, dada la imposibilidad de que ello ocurra antes del 1° de marzo de 2016, resulta razonable dejar





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

con la implementación del Código Procesal Penal de la Nación. Todo ello con la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada”.

Fue así que se planteó en doctrina y jurisprudencia la discusión respecto de la operatividad o no de las causales de extinción de la acción introducida al art. 59 inc. 6° por la Ley n° 27.147, cuya vigencia no se encontraba expresamente suspendida por el DNU n° 257/2015, pero sí el mecanismo de reparación integral se encontraba expresamente ligado a las disposiciones del Código Procesal Federal.

Esta discusión hoy se encuentra zanjada, y existe consenso en la jurisprudencia que se trata de una norma operativa. Así, entre los precedentes jurisprudenciales que así lo reconocen se pueden mencionar fallos dictados por los Tribunales Orales en lo Criminal de CABA N° 1, 2, 7, 15, 20, 26 y 30, quienes se expidieron favorablemente a la extinción de la acción penal por las causales de conciliación y reparación integral del daño. En idéntico sentido, se expresó la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, exigiendo como el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal (Cfr. Causa CCC 25872/2015/to1/cnc1 “Verde, Alva, Brian Antoni s/ recurso de casación”, registro N° 399/2017, rta. 22/05/2017). **También la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, se pronunció por la vigencia y operatividad de la Ley 27.147,** al sostener que “... se trata de una ley sancionada y promulgada por el Congreso... las vicisitudes de la implementación de un código adjetivo no pueden impedir la aplicación de dos causales de extinción de la acción penal que se encuentran vigentes en el código de fondo, máxime cuando lo concerniente a la procedencia en el caso concreto será materia de debate en los tribunales” **cfr. Causa CCC 25020/2015/to1/CFC1. Sala IV, “Villalobos, Gabriela Paola y otro s/ defraudación”.** Registro 1119/2017, voto del Dr. Gustavo Hornos). También el suscripto se pronunció en el sentido descripto en los autos caratulado: “Principal en Tribunal Oral TO01 - Imputado: Suarez, Romina de los Ángeles s/Uso de Documento Adulterado O Falso (Art.296) 12480/2014”, entre varios otros.

A este desarrollo y reconocimiento jurisprudencial se suma la decisión adoptada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que con fecha 13 de noviembre de 2019 dicta la Resolución n° 2/2019, publicada en B.O. 19/11/2019, que expresamente reza: “que el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal establece que los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social. Que esta norma permite a los jueces y fiscales contar con una herramienta procesal para la implementación de métodos alternativos de

resolución de conflictos, tal como el previsto en el artículo 34 del Código Procesal Penal





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

Federal que permite la celebración de acuerdos conciliatorios entre la víctima y el imputado, que son herramientas propias de los sistemas acusatorios que permiten gestionar eficazmente la carga del trabajo. Que los institutos de la conciliación y la reparación integral del perjuicio producido por el delito se encuentran previstos en el inciso 6 del artículo 59 del Código Penal de la Nación como causa de extinción de la acción penal, con la salvedad que se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Que actualmente la Ley N° 23.984 no prevé ninguna pauta procesal para el ejercicio de esta causal de extinción de la acción penal. Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario implementar el artículo 34 citado a fin de brindar las normas procesales que permitan el ejercicio de la conciliación en el marco del proceso penal en los casos y de la forma allí establecidos. Que estos artículos no resultan incompatibles con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984, toda vez que regulan el camino procesal para el ejercicio de una causal de extinción de la acción penal prevista en el Código sustantivo en materia penal. Que, por otra parte, el artículo 31 del Código Procesal Penal Federal prevé la regulación de los criterios de oportunidad, que se encuentran previstos en el inciso 5 del artículo 59 del Código Penal de la Nación como causal de extinción de la acción penal. Que actualmente la Ley N° 23.984 no prevé ninguna pauta procesal para el ejercicio de esta causal de extinción de la acción penal. Que, a raíz de ello, resulta necesario implementar el artículo referido anteriormente para que los representantes del Ministerio Público Fiscal cuenten con la herramienta legal para poder prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública exclusivamente en los casos allí establecidos, incorporación que les permitirá gestionar la carga del trabajo de forma más efectiva y orientar mayores esfuerzos de investigación a los casos complejos”.

Sentado ello, corresponde señalar que no existe obstáculo legal para la aplicación del instituto de reparación integral normada por el art. 59 inc. 6° del C.P., conforme lo propone la defensa con dictamen favorable del Sr. Fiscal General, Dr. Carlos Gonella.

V. El contenido de la reparación propuesta

En instituto de la reparación integral se basa en la idea de derecho penal como un conflicto entre partes, primordialmente. Por lo que, consecuencia lógica de esto es que se atiendan preferentemente los intereses de la víctima, que en el presente caso se encuentra perfectamente identificada: la Administración Federal de Ingresos Públicos, en tanto su carácter de órgano recaudador.

Durante la audiencia de visu la AFIP ha informado al Tribunal que el cálculo de la suma de capital y los intereses resarcitorios y punitivos devengados al día de la fecha indica que el monto que el acusado adeuda totaliza la suma de veinte millones de pesos





Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

(\$20.000.000), reconociendo que utilizan para dicho cálculo una formula diferente. Posteriormente, incorpora informe que da cuenta el perjuicio que habría sufrido cada uno de los 332 trabajadores cuyos aportes habrían sido retenidos por el acusado, cuya suma se asemeja al monto atribuido en la requisitoria fiscal de elevación a juicio.

En este sentido, conforme lo ha expuesto la defensa la capacidad de pago del acusado le permite asumir la obligación de abonar en un pago único la suma de doce millones setenta y seis mil ciento veintiún pesos con setenta y nueve ctvs. (\$12.076.121,79), en carácter de reparación. Monto que resulta de aplicar al capital histórico imputado, esto es tres millones ochocientos noventa y un mil novecientos ochenta y cinco pesos con veintidós ctvs. (\$3.891.985,22) la tasa pasiva del Banco Nación.

A este respecto, debo señalar que tradicionalmente la jurisprudencia ha utilizado la tasa pasiva del Banco Nación, criterio que he sustentado en varios fallos entre ellos en la causa “Sacavino, Jorge Enrique c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/Acción Meramente Declarativa de Derecho” CFAC, Sala B, 28 de septiembre de 2022. Razón por la cual, considero ajustado a derecho que la propuesta de actualización del capital histórico se ajuste conforme a dicha tasa, conforme lo propone la defensa. Señalando que la decisión aquí adoptada repercute únicamente en el ámbito penal, en tanto que si existiese alguna diferencia o saldo que adeudar en el plano administrativo subsisten – si procediere- las vías habilitadas por la Ley n° 11.683.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal acepta la propuesta de aplicar al presente caso el mecanismo de reparación integral previsto por el art. 59 inc. 5 y 6 del C.P., y en consecuencia, una vez cumplidas las condiciones pautadas de extinguir la acción penal ejercitada en contra de Héctor Daniel Ferreyra.

Atento lo expuesto Héctor Daniel Ferreyra deberá depositar, dentro del plazo de 5 días que quedar firme la presente decisión, un pago único de la suma de doce millones setenta y seis mil ciento veintiún pesos con setenta y nueve ctvs. (\$12.076.121,79) en la cuenta que la AFIP deberá informar dentro de las 48 hs. de notificada la presente decisión

Por todo ello, oído el Ministerio Público, se

RESUELVE:

I. Hacer lugar a la solicitud de Reparación Integral del perjuicio ocasionado por el delito solicitado por la defensa con consentimiento expreso del Sr. Fiscal General, Dr. Carlos Gonella, y en consecuencia, imponer a **Héctor Daniel Ferreyra**, la obligación de abonar en un pago único la suma de doce millones setenta y seis mil ciento veintiún pesos con setenta y nueve ctvs. (\$12.076.121,79) la cual deberá ser depositada dentro del quinto día de quedar firme la presente decisión en la cuenta que la AFIP indique.

II.- Cumplimentado y acreditado el punto n° I corresponde pasar a despacho





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

ejercitada y el consecuente sobreseimiento de **Héctor Daniel Ferreyra**, D.N.I N° 14.292.823, argentino, nacido el día 20 de diciembre de 1960, hijo de Rodolfo Ferreyra y de Elena Borromeo, con domicilio en calle Avellaneda n° 1987 B° Alta Córdoba, Provincia de Córdoba; en orden al delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social conducta prevista y penada por el art. 7 del Régimen Penal Tributario, por aplicación del criterio de oportunidad y reparación integral del perjuicio (arts. 59, incs. 5° y 6° C.P. y 31, 34 y 336, inc. 1° C.P.P.F.).

III.- PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER

